

Santiago, dos de mayo de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

1º.- Que en este procedimiento declarativo tramitado ante el Juzgado de Letras de Colina, bajo el Rol C-3890-2020, caratulado “Ferrada/ Ortega”, la parte demandada recurre de casación en el fondo en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de esta ciudad, que confirmó el fallo de primer grado, de veintiocho de junio de dos mil veintidós, por medio del cual se acogió la demanda, declarándose resuelto el contrato en cuestión y condenando a la recurrente a la restitución de \$17.500.000.-, además, se acogió parcialmente la acción indemnizatoria, ordenando el pago de \$9.202.028.-, por concepto de daño emergente.

2º.- Que el recurrente de nulidad afirma que en la sentencia cuestionada se infringe lo dispuesto en los artículos 1709, 2314, 2329 y 2330 del Código Civil en relación con lo previsto en los artículos 14 y 18 de la Convención de Naciones Unidas Sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías.

Argumenta que los sentenciadores no realizan una ponderación racional de los medios de prueba, puntualizando que se otorgó valor a un informe que no fue ratificado; además, sostiene que el tribunal varió el fundamento de la pretensión, incurriendo en *ultra petita*.

Al desarrollar las infracciones de ley, indica que los hechos que se imputan a su parte se revelan como condiciones no determinantes en la producción del hecho dañoso, ya que de no mediar la negligencia de la víctima no habrían sido suficientes para producir los daños, concluyendo que no se configuraría la relación de causalidad exigida en los mencionados artículos 2314 y 2329, requisitos indispensables para configurar la responsabilidad extracontractual.

Por otra parte, acusa vulneración a las leyes reguladoras de la prueba, específicamente a los artículos de la aludida convención en relación con lo previsto en el artículo 1709 del Código Civil, lo que se produciría porque se habría excluido prueba instrumental; en consecuencia, solicita anular el fallo recurrido, y dictar uno de reemplazo en que se rechace la demanda en todas sus partes.

3º.- Que el artículo 772 del Código de Enjuiciamiento Civil, en armonía con lo previsto en los artículos 764 y 767 del citado cuerpo legal, exige, como sustento de la invalidación de la sentencia impugnada, el quebrantamiento de una o más normas legales contenidas en la decisión. Por ello, es menester que al interponer un recurso con tal objeto su promotor deba cumplir necesariamente con lo exigido por el precepto en análisis, esto es, expresar en qué consisten él o los errores de derecho de que adolece la sentencia recurrida.

Además, del cumplimiento del requisito enunciado en el párrafo precedente, con idéntica rigurosidad el mismo artículo 772 aludido impone a quien interponga un recurso de casación en el fondo la obligación de señalar, de manera



circunstanciada, en el respectivo escrito, el modo en que él o los errores de derecho que denuncia han influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia que trata de invalidar. Por ende, la exigencia señalada no se agota con la simple indicación de las normas conculcadas, sino que requiere además un desarrollo argumentativo en torno a los yerros de derecho que acusa.

4º.- Que al enfrentar lo expuesto precedentemente con el recurso de casación en estudio, se concluye indefectiblemente que carece de los requerimientos legales exigibles para su interposición. En efecto, el recurrente en el desarrollo de su arbitrio se limita describir distintas hipótesis de hecho y de derecho, sin especificar cómo aquellas concretamente influirían en la controversia.

Por otro lado, se ha de tener presente que la pretensión corresponde a la de resolución de contrato con indemnización de perjuicios, es decir, una acción propia de la responsabilidad contractual, sin embargo el recurrente al descartar la existencia de la relación de causalidad entre el hecho que se le imputa y los daños cuyo resarcimiento se solicita, alega infracción a lo previsto en los artículos 2314 y 2329 del Código Civil, esgrimiendo que ellos contienen los requisitos indispensables de la responsabilidad extracontractual, circunstancia que torna confuso el recurso. En este mismo sentido, el recurrente denuncia que se prescindió de prueba documental, sin especificar qué documentos fueron excluidos, ni tampoco cómo aquello influiría en lo dispositivo del fallo; además, a propósito de este vicio menciona que se vulnera el artículo 1709 del Código Civil en relación a la Convención de Naciones Unidas Sobre Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, sin que sea posible advertir cómo aquél cuerpo normativo podría recibir aplicación en el caso, ni menos cómo se pudo llegar a infringir por los sentenciadores de instancia.

Finalmente, cabe anotar que un recurso como el de la especie no puede sustentarse en aspectos formales del proceso, como lo sería la denuncia de haber incurrido la sentencia en *ultra petita* o la de carecer de las consideraciones de hecho y de derecho que le resultan exigibles, por resultar ajeno al ámbito de la casación en el fondo, cuyo presupuesto cardinal es que la infracción invocada constituya un yerro de derecho que influya de forma sustancial en lo dispositivo del fallo, exigencia que únicamente concurre cuando se ha vulnerado una o más de las normas legales en que propiamente descansa el fallo, esto es, que tengan el carácter de decisorias de la *litis*.

Y de conformidad además con lo dispuesto en los artículos 767 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se declara **inadmisible** el recurso de casación en el fondo interpuesto por el abogado Patricio Alejandro Salazar Allende, en representación de la demandada, en contra de la sentencia pronunciada por la Corte



de Apelaciones de la Santiago de veintiocho de enero de dos mil veinticinco,
rectificada el veinticinco de abril del mismo año.

Regístrese y devuélvase.

Nº 5.969-2025.



Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Mauricio Alonso Silva C., María Angélica Cecilia Repetto G., Maria Gajardo H. y los Abogados (as) Integrantes Carlos Antonio Urquieta S., Álvaro Rodrigo Vidal O. Santiago, dos de mayo de dos mil veinticinco.

En Santiago, a dos de mayo de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

